

2011



Resolución Gerencial General Regional
No. -2011-Gobierno Regional del Callao-GGR
1493

Callao, 17 NOV. 2011

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por **ALEJANDRO BARZOLA HURTADO** contra la Resolución Directoral Regional No. 001239 del 30 de marzo de 2010; y el Informe Legal No. 1608-2011-GRC/GAJ del 14 de noviembre 2011;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regional N° 001239 del 30 de marzo de 2010, la autoridad educativa **RESUELVE: ARTICULO UNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE**, entre otras, la solicitud de pago de la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 037-94 formulada por **ALEJANDRO BARZOLA HURTADO**, pensionista administrativo, servidor auxiliar "C";

Que, mediante expediente N° 032401 del 17 de octubre de 2011, **ALEJANDRO BARZOLA HURTADO** interpone recurso impugnativo de apelación contra el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional No. 001239 del 30 de marzo de 2010, con la finalidad de que revoque la apelada y se de cumplimiento al DU 037-94, STC 2616-2004/AC/TC, Ley 29702 y D.L.25920 y como pretensiones accesorias pago de los devengados y los intereses legales;

Que, mediante Hoja de Ruta 032981, el Director Regional de Educación del Callao, eleva el recurso de apelación interpuesto por el administrado y los antecedentes a esta instancia, a fin que el superior jerárquico emita el pronunciamiento correspondiente.;

Que, el Recurso Impugnativo de Apelación se interpone con la finalidad que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise la resolución del subalterno, en virtud del Principio de la doble instancia, y se sustenta en diferente interpretación de pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho conforme lo prevé el artículo 209° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; en consecuencia, la administración deduce que su apelación se sustenta en una cuestión de puro derecho, de conformidad con la exigencia procesal contenida en el artículo 209° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Resolución Directoral Regional No. 001239 del 30 de marzo de 2010, la autoridad educativa **RESUELVE: Artículo Único: declarar IMPROCEDENTE** la solicitud de pago de la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia N° 037-94, formulado por **ALEJANDRO BARZOLA HURTADO** por cuanto el artículo 7° literal d) del Decreto de Urgencia N° 037-94 señala que a los servidores públicos, activos y cesantes, que hubiesen recibido los aumentos otorgados por el Decreto Supremo N° 019-94-PCM, como es el caso del recurrente, no les corresponde la Bonificación Especial que otorga el Decreto de Urgencia N° 037-94, a partir del 01 de Julio de 1994 por existir prohibición legal expresa debiendo la autoridad administrativa ceñirse a las disposiciones del Decreto Legislativo 847;

Que, la Resolución Directoral Regional No. 001239 fue recabada por **ALEJANDRO BARZOLA HURTADO** de la Oficina de Trámite Documentario de la Dirección Regional de Educación del Callao el 14 de octubre de 2011 y el recurso de apelación interpuesto el 17 de octubre de 2011, con lo que se ha cumplido con el plazo de 15 días perentorios para su presentación, establecido en el artículo 207.2 de la Ley 27444;



14

Que, dicho Recurso ha sido oportunamente presentado, por lo que, en estricta aplicación del Principio de Legalidad contemplado por el numeral 1.1. del artículo 1 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece “Que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”, concordante con el numeral 1.2. del artículo 1° del mismo cuerpo de Leyes que contiene el Principio del Debido Procedimiento, “Por el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas ya obtener una decisión motivada y fundada en derecho”, debe atenderse y meritarse las alegaciones de la administrada, a fin de emitir un pronunciamiento dentro del marco del principio de legalidad, respetando el derecho al debido procedimiento administrativo de la impugnante;

Que, asimismo con lo señalado en el numeral 1.8 Principio de Conducta Procedimental del Artículo IV de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General que establece “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal”.

Que, en tal sentido frente a los argumentos de hecho y de derecho de la impugnante, se aprecia que si bien es cierto el Decreto de Urgencia N° 037-94 establece una Bonificación Especial en favor de los servidores públicos, activos y cesantes de acuerdo a la Escala correspondiente; no menos cierto lo es también que el artículo 7° literal d) de la acotada norma, señala que a los servidores públicos, activos y cesantes, que hubiesen recibido los aumentos otorgados por el Decreto Supremo N° 019-94-PCM, no les corresponde la Bonificación Especial que otorga el Decreto de Urgencia N° 037-94, a partir del 01 de Julio de 1994;

Que, mediante Hoja de Coordinación Interna No. 1467-2005-ME/SG-OAJ señala que desde el día siguiente de publicada la sentencia 2616-2004-AC/C los operadores judiciales se encuentran en la obligación legal de seguir el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en los casos que se demande en vía judicial el otorgamiento de la bonificación especial DU. 037-94 precisando que al haber emitido el Tribunal Constitucional un criterio de interpretación y no un mandato que obligue a todos los poderes del Estado, corresponde establecer, en atención a las particularidades de cada caso, la pertinencia de la aplicación de dicho criterio en el fuero judicial;

Que, la ley 29702 de fecha 06 de junio de 2011 dispone el pago de la bonificación del decreto de urgencia 037-94 de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 2616-2004-AC/TC expedida el 12 de setiembre de 2005, no requiriéndose sentencia judicial ni calidad de cosa juzgada, debiendo el MEF establecer las previsiones presupuestales para el año 2012;

Que el fundamento 11 de la sentencia aludida señala que no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94, los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera, y que tienen sus propias escalas remunerativas;

Que, en este orden de ideas se colige que los Docentes del Magisterio Nacional, Funcionarios, Servidores y Cesantes del Sector Educación, a quienes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 019-94-PCM, se les ha otorgado la Bonificación Especial a partir del 1 de Abril de 1994, no les corresponde percibir la Bonificación Especial que establece el Decreto de Urgencia N° 037-94, a partir del 1 de Julio de 1994. Por lo que la gerencia de asesoría jurídica considera que la decisión impugnada debe confirmarse en todos sus extremos, considerando que no le corresponde al recurrente la Bonificación Especial que otorga el Decreto de Urgencia N° 037-94, a partir del 01 de Julio de 1994. En consecuencia el petitorio planteado por ALEJANDRO BARZOLA HURTADO no resulta amparable;



Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2003-ED, se adecua la Dirección de Educación del Callao como Dirección Regional de Educación del Callao, disponiendo su dependencia administrativa del Gobierno Regional del Callao y en lo técnico- Funcional del Ministerio de Educación; mediante Oficio N° 300-2005-CND/ST, de fecha 07 de marzo 2005 el Consejo Nacional de Descentralización a solicitud de la Dirección Regional del Callao, emitió opinión, manifestando que al Gobierno Regional del Callao le corresponde resolver en última instancia administrativa los recursos interpuestos contra lo resuelto por la Dirección Regional del Callao, debido a que ésta depende administrativamente del Gobierno Regional del Callao;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso "d" de la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR, las facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de abril del 2009 y sus modificatorias y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao;

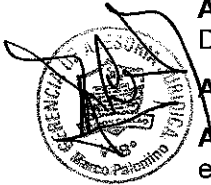
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por **ALEJANDRO BARZOLA HURTADO** contra el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional N° 001239 del 30 de marzo de 2010;

Artículo Segundo.- Declarar AGOTADA la vía administrativa.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a la recurrente en el domicilio señalado en su recurso impugnativo, así como al Director de la Dirección Regional de Educación del Callao, de conformidad con lo establecido por el artículo 21.1 y 21.3 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DR. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLAN
Gerente General Regional